

**“Transparencia de Partidos Políticos mediante el seguimiento al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPO) en el 2017”.**

**“Transparency of Political Parties through the follow-up to the Transparency Obligation Portals System (SIPO) in 2017”.**

Autor: Dr. Ignacio M. López Sandoval<sup>1</sup>

Coautor: Dra. Rocío Magdalena Aguilar Rodríguez<sup>2</sup>

## **Resumen**

La transparencia más que una moda académica novedosa o una exigencia de seguimiento burocrática, es una nueva forma de hacer política; que bien implementada puede enriquecer la vida democrática y política de una sociedad. Los ciudadanos, como mecanismo de control, tiene el deber de corroborar si sus gobernantes y representantes políticos hacen un uso adecuado de los recursos y prerrogativas que se les otorgan, la manera de facilitar esta actividad es a través del libre acceso a la información y la obligación de transparentar. La transparencia y acceso a la información son elementos importantes de la rendición de cuentas, que se pueden estudiar y analizar desde la visión del institucionalismo económico, en específico desde la visión de la Teoría del Agente-Principal.

El objetivo de esta investigación es analizar si la información disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPO) es menor que aquella que se encuentra en el sitio de transparencia de los principales Partidos Políticos. Se considera que la plataforma disminuye el desempeño de los sujetos obligados si se promedia el cumplimiento que tienen en sitio y SIPO en rubros de: metas y objetivos; remuneraciones; padrón de proveedores; bienes; viáticos; currículum vitae de funcionarios; presupuesto y compras.

**Palabras clave: Rendición de cuentas, Transparencia, Acceso a la Información, Partidos Políticos, Agente-Principal**

---

<sup>1</sup> Profesor Investigador del Departamento de Estudios Institucionales de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa. E-mail: ignaciolsmx@yahoo.com.mx

<sup>2</sup> Doctora en Estudios sociales de la línea de Procesos Políticos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. E-mail: magdacanela22@gmail.com

**Abstract.**

Transparency, more than an innovative academic fashion or a demand for bureaucratic follow-up, is a new way of doing politics; that well implemented can enrich the democratic and political life of a society. Citizens, as a control mechanism, have the duty to corroborate if their governors and political representatives make an adequate use of the resources and prerogatives granted to them, the way to facilitate this activity is through free access to information and obligation to transparent. Transparency and access to information are important elements of accountability, which can be studied and analyzed from the perspective of economic institutionalism, specifically from the vision of the Principal-Agent Theory.

The objective of this investigation is to analyze if the information available in the SIPOT is less than that which is found in the transparency site of the main Political Parties: goals and objectives; remunerations; standard of suppliers; goods; travel expenses, goals and objectives; remunerations; standard of suppliers; goods; travel expenses; curriculum vitae of officials; budget and purchases.

**Keywords: Accountability, Transparency, Access to Information, Political Parties, Principal-Agent**

## **Introducción**

La transparencia más que una moda académica novedosa o una exigencia de seguimiento burocrática, es una nueva forma de hacer política; que bien implementada puede enriquecer la vida democrática y política de una sociedad. Los ciudadanos, como mecanismo de control, tiene el deber de corroborar si sus gobernantes y representantes políticos hacen un uso adecuado de los recursos y prerrogativas que se les otorgan, la manera de facilitar esta actividad es a través del libre acceso a la información y la obligación de transparentar. La transparencia y acceso a la información son elementos importantes de la rendición de cuentas, que se pueden estudiar y analizar desde la visión del institucionalismo económico, en específico desde la visión de la Teoría del Agente-Principal.

El objetivo de esta investigación es analizar si la información disponible en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) es menor que aquella que se encuentra en el sitio de transparencia de los principales Partidos Políticos. Se considera que la plataforma disminuye el desempeño de los sujetos obligados si se promedia el cumplimiento que tienen en sitio y SIPOT en: metas y objetivos; remuneraciones; padrón de proveedores; bienes; viáticos; currículum vitae de funcionarios; presupuesto y compras.

El trabajo se integra por tres apartados, en el primero se describe la teoría del Agente-Principal como marco de referencia teórica para entender la rendición de cuentas y la transparencia como mecanismos de control de los agentes. En el segundo apartado se desarrollan algunos elementos teóricos de la rendición de cuentas, de la transparencia y el acceso a la información. Y en el último apartado se realiza una revisión del SIPOT para estudiar los diferentes niveles de transparencia y acceso a la información.

## **I.- Teoría del Agente- Principal (TAP)**

La base de la economía institucional y del enfoque económico de las organizaciones se integra por la teoría de la agencia, junto con la teoría de costos de transacción, la teoría de los derechos de propiedad y de los contratos incompletos. La rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información son mecanismos de control político ciudadano que se pueden analizar mediante el institucionalismo económico.

Una relación entre dos o más individuos en la que existe una diferencia jerárquica con diferentes niveles de información y en los que se configuran intereses diferentes en la búsqueda de la maximización de beneficios personales o de grupo se puede modelar mediante la Teoría del Agente- Principal. Este es el caso de la relación entre ciudadanos y políticos en el ámbito de la vida democrática.

En cualquier interacción económica se pueden identificar dos partes: el agente y el principal. El agente realiza actividades y/o acciones por cuenta del principal, el cual necesariamente delega cierto nivel de su autoridad. Sin embargo, los intereses del agente y principal divergen. Por ello, al delegar autoridad al agente implica que no necesariamente se cumplirán los objetivos del principal. Situación que se conoce como problema de la agencia:

1) La información entre el principal y agente es asimétrica. El agente sabe más del negocio, oficio o profesión que desempeña, que el principal. La economía denomina esta situación como el problema de la información oculta (hidden information) o selección adversa (adverse selection).

2) La acción del agente, es decir, su nivel de esfuerzo o la calidad de su trabajo, no es directamente observable por el principal. Un gerente puede obtener datos acerca de cuantas visitas ha realizado un agente de ventas, pero no puede saber el nivel del esfuerzo ni la calidad de las presentaciones hechas por el agente. Al principal le resulta costoso monitorear al agente. La TAP caracteriza esta situación como el problema tipo acción oculta (hidden action) o del riesgo moral (moral hazard).

3) Los resultados de las acciones del agente no depende sólo de su esfuerzo, sino también de factores externos (cambios en la demanda, acciones de la competencia, etc). Investigar el efecto de los factores externos puede ser muy costoso, implica altos costos de transacción (costos por la búsqueda de información o monitoreo). El agente para justificar los malos resultados puede argumentar que se debe a las condiciones ambientales adversas. El agente se aprovecha de que el monitoreo es costoso y tiende a comportarse de manera oportunista.

4) El principal y el agente son racionales y buscan maximizar sus funciones de utilidad (beneficios individuales), que no coinciden y que en algunos casos pueden ser opuestos. Las decisiones que son las mejores desde el punto de vista del agente, van a parecer sub-óptimas para el principal, a no ser que el agente sea restringido debidamente. (Foss,1995). La TAP identifica dos tipos del problema de la agencia:

1) El problema de la acción oculta (hidden action, moral hazard), que surge antes de realizar el trabajo, cuando el agente aconseja al principal el logro de objetivos fáciles de alcanzar para el agente. El principal se deja guiar por la opinión del experto y comete una «selección adversa» de las metas: adversa a sus propios intereses.

2) El segundo tipo del problema de agencia surge en el transcurso del trabajo, cuando el principal, sin poder observar el esfuerzo del agente, debe decidir, cuánto va a pagar al agente (Furubotn, 1998).

Estos problemas son comunes dentro de las empresas privadas y en los asuntos públicos. Los votantes (principal) entregan el mandato al político (agente). Surgen los problemas de la información oculta (el político conoce mejor sus capacidades y la tendencia política que los votantes tienen) y de la acción oculta (monitorear al diputado o político es costoso para el votante), lo que genera incentivos para la conducta oportunista del político. Los mismos problemas aquejan la relación entre el político (principal) y el experto - burócrata (agente).

La TAP reconoce que tanto el agente, como el principal son racionales y por eso sus intereses no tienen por qué coincidir. La TAP explica el origen del problema de la agencia y sugiere modelar las situaciones reales con vistas a encontrar las soluciones a través de cierto diseño de reglas que podrían disminuir los costos de transacción.

## **II.- Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información como diseños institucionales.**

Las soluciones que sugieren los modelos basados en la TAP, generalmente consisten en el diseño de un contrato o ciertas regulaciones (diseño institucional) que formule los incentivos (positivos o negativos) correctos, que incentiven al agente a no desviarse demasiado de los intereses del principal.

La rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información son mecanismos del diseño institucional o reglas que permiten que agentes racionales, egoístas y oportunistas sean controlados por el principal en el ámbito público.

El modelo de TAP en el ámbito público tiene como objetivo mostrar la relación entre el principal (los ciudadanos) y el agente (funcionarios públicos elegidos o políticos, para que actúen

en nombre y beneficio del principal) a partir del juego de intereses que se conjuga en las asimetrías de la información que dificultan el monitoreo del primero sobre el segundo, con el fin de cubrir las necesidades o, de igual manera, los intereses de los principales.

Si los ciudadanos conociesen exactamente todas las acciones del agente (o toda la información que este posee), éste último no actuaría a favor suyo y en contra de los intereses sociales (O'Donnell, 2003: 35). Normalmente los ciudadanos no tienen la información completa o no se preocupan por informarse porque representa un costo en tiempo, esfuerzo o dinero. Esta situación en las democracias actuales representa un elemento importante para que los políticos generen acciones oportunistas que van en contra de los intereses de los ciudadanos. Es importante reconocer a quienes los agentes tienen que responder en los procesos de democracia representativa. No existirían problemas de agencia si fuese posible realizar un seguimiento de las acciones del agente a un coste razonable. Lo anterior obviamente es imposible, en muchas ocasiones debido a que el agente tiene acceso a una información que se encuentra fuera del alcance del principal y que induce a actuar en un sentido que pasará inadvertido a este último.

Sin embargo, estos problemas detectados por la TAP se pueden moderar a partir del diseño de reglas como: “answerability (contestabilidad) y enforcement (fuerzas para hacer cumplir lo comprometido). Ambos elementos enmarcados por la accountability y transversalizados por la dotación de recursos o endowment (habilidades, capacidades, poder político-social, voz pública)”. (Natal, 2006:4)

“En este sentido se toma como el agente a las instancias gubernamentales que son sujetos de answerability por parte de iniciativas de Monitoreo Ciudadano (principal). El proceso analítico radica en dos momentos: 1) la caracterización de los actores; y 2) La dinamización de insumos de información para operacionalizar los marcos normativos que permiten la práctica de la transparencia.

Los cuáles, en términos analíticos, pueden resultar en: La creación de ciudadanía activa (a través de reglas informales como los hábitos y rutinas que se convierten en prácticas sociales y políticas, acostumar a los ciudadanos a solicitar información y rendición de cuentas a sus representantes políticos). Transversalizados por las asimetrías de la información “comunes” en estructuras democráticas piramidales o de multi-nivel.

Natal y Millán (2006) mencionan la relación entre Agente-Principal como “el derecho de un actor A de exigir a B que cumpla con su obligación de dar cuenta de – es decir, de informar y justificar- sus acciones, decisiones y de los resultados bajo su dominio, cuando A delega su autoridad a B para que sea ejercida con ciertos grados de libertad relativa – es decir, de discrecionalidad- , a fin de que actúe en su nombre y en su beneficio y, además dispone de los instrumentos y la fuerza necesaria para imponer sanciones a B, en la eventualidad de que su gestión- es decir, el conjunto de acciones, decisiones y resultados sea satisfactorio, a la luz de parámetros previamente establecidos por el delegantes”. (Natal; Millán, 2006:6)

La *accountability* es la rendición *obligatoria* de cuentas, sería la institucionalización o conformación de reglas formales que implican una sanción para el agente. En este mismo esquema de reglas, junto con la rendición de cuentas (por obligación), el concepto de *accountability* también incluye la exigencia de cuentas (por derecho, para el principal). En los controles al poder, las obligaciones de unos son los derechos de otros, la idea de *accountability* contempla de antemano a las dos partes involucradas –a los que rinden cuentas al igual que a los que exigen cuentas.

La rendición de cuentas tiene dos dimensiones básicas. Por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público (*answerability*); y por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos (*enforcement*) (Natal/Millán, 16:2006).

La rendición de cuentas como diseño institucional abarca de manera genérica tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: a) obliga al poder a abrirse a la inspección pública; b) lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y c) lo supedita a la amenaza de sanciones. Los tres aspectos en su conjunto –información, justificación y castigo – convierten a la rendición de cuentas en una empresa multifacética. La convierten en un esquema de regulación que incluye la vigilancia, la auditoría, la fiscalización o la penalización, y todos comparten la pretensión de moderar el ejercicio del poder, de tal forma que los agentes respondan a los intereses del principal. Los resultados de este diseño institucional que articula incentivos dependerá del tipo de incentivo, la calidad y la magnitud del incentivo.

Los ejercicios de rendición de cuentas que nada más exponen una conducta inapropiada, sin imponer los castigos correspondientes (incentivos negativos), frecuentemente se ven como ejercicios débiles de rendición de cuentas, La relación estrecha entre la rendición de cuentas y la

disponibilidad de sanciones concuerda con lo que nos dice la literatura neo-institucionalista sobre las fuentes de instituciones efectivas.

En México, en particular, varios autores (Schedler, 2000; Merino 2004; Natal 2006) coinciden que, después de décadas de gobierno irresponsable, el establecimiento de instituciones y prácticas efectivas de rendición de cuentas representa una de las primeras aspiraciones de la vida democrática, por lo que se considera a la rendición de cuentas como un tema importante dentro de la vida institucional mexicana.

Los altos índices de corrupción que existen en nuestro país han generado un reclamo unánime de una rendición de cuentas efectiva, que establezca y aplique las sanciones correspondientes a aquellos agentes que no cumplan las normas que los regulan. Durante décadas, el sistema político promovió la impunidad como regla informal. Todo funcionario y organización era, en última instancia, responsable solamente ante el Presidente de la República; con las nuevas prácticas democráticas se han ido regulando, de manera gradual, los márgenes de discrecionalidad de organizaciones y funcionarios públicos, aunque todavía no se ha generado una práctica social de participación ciudadana que exija también en términos efectivos la rendición de cuentas. En este contexto, muchas veces el clamor por una rendición de cuentas efectiva es un clamor por castigos efectivos, que incentiven o despierten la participación ciudadana como control político de sus agentes o representantes políticos, modelados como agentes racionales, egoístas y oportunistas.

Un buen diseño de accountability puede incentivar la participación de los ciudadanos, no sólo en la evaluación de las acciones gubernamentales, sino también en la construcción de éstas. Esto estaría relacionado con el establecimiento de un contrato (diseño institucional) que indique los límites y sanciones para los representantes políticos (agentes), así como los mecanismos de control que los ciudadanos (principal) pueden ejercer sobre sus representantes, bajo un esquema de sanciones adecuadas y efectivas.

Si bien es cierto, en la actualidad existe una visible brecha entre gobernantes y gobernados, en donde los últimos sienten desconfianza ante los resultados de las acciones gubernamentales y en donde se considera que poco o nada se puede hacer para controlar y/o castigar a los agentes que no cumplen o no son eficientes con sus funciones.

Esta brecha depende del intercambio y flujo de información que hay entre ambas esferas, es decir; del tipo y nivel de accountability que se haga por parte del gobierno (que en gran medida



depende del diseño institucional que le dio vida), y que define el tipo y nivel de brecha que exista para con los ciudadanos. El problema de la brecha entre ciudadanos y agentes gubernamentales debe considerar lo siguiente:

1) La primera de estas aristas es la que propone Natal (2006) cuando menciona que “la relación entre información y democracia es un tema central, que implica que la responsabilidad del funcionario de gobernar, pasa por la acción de informar al ciudadano”. Que dependerá de la necesidad de la información para la toma de decisiones y para los públicos interesados en los asuntos en cuestión. La difusión en todos los medios de comunicación e información con los que se disponga sin altos costos de decodificación. Ordenamiento entre las entidades que puedan estar involucradas en un mismo ejercicio público, es decir, dentro de la información que se disponga debe ser clara la trayectoria que tiene la información entre distintos departamentos y/o niveles de la administración pública.

2) La segunda arista es la obligación (que solo se puede adquirir mediante la práctica habitual o rutinas, como regla informa) que adquieren los ciudadanos de involucrarse cada vez más en la discusión de los asuntos públicos, donde esta participación le permita un mejor nivel de bienestar social como incentivo de participación. Esta incluye considerar si los ciudadanos cuentan con recursos suficientes para saber que pedir, con quien pedir, como pedir y qué hacer con lo que se pide de tal forma que satisfaga su interés. Se conocen o se cuentan con canales por medio de los cuales el ciudadano pueda reatrolimentar a los agentes de gobierno. Cómo y cuál es el tipo de socialización de información que tienen los ciudadanos.

3) La tercera arista se refiere a como estos sentidos se van tejiendo de tal forma que se vuelve un proceso democrático, y es aquí en donde el principio de accountability se observa como un medio para conciliar el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes, es decir la accountability no es el fin último, sino un elemento que permite resolver problemas de la acción gubernamental con el co-gobierno.

Sin embargo, los resultados de la rendición de cuentas se pueden distorsionar cuando las iniciativas ciudadanas se enmarcan en programas gubernamentales destinados a la accountability, mediante ejercicios de monitoreo, en donde la dotación de recursos para solicitar información al gobierno proviene del mismo gobierno y en donde el grupo de ciudadanos se encuentran incrustados en organismos autónomos de una esfera de gobierno, pero que no se desprenden de su

figura de ciudadanos. Esto dependerá del diseño institucional o de reglas que estructuren los incentivos necesarios para hacer efectiva la participación ciudadana en el control de los agentes políticos de tal forma que se fomente la vida democrática.

### **III.- Transparencia de Partidos Políticos mediante el seguimiento al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en el 2017.**

El 11 de mayo, Animal Político publicó la nota “La Plataforma Nacional de Transparencia es un lastre, denuncia organización” en la que la asociación civil Iniciativas Humanas y Sociales hace un estudio de 107 sujetos obligados a la transparencia. En este estudio se analizó una muestra significativa en el SIPOT y en los sitios de transparencia, la información recabada entre el 6 y 8 de mayo del 2017 consistió en: metas y objetivos; remuneraciones; padrón de proveedores; bienes; viáticos; currículum vitae de funcionarios; presupuesto y compras.<sup>3</sup>

En ese análisis se observó que la información disponible en el SIPOT es menor que aquella que se encuentra en el sitio de transparencia de los sujetos obligados. Por ello, se considera que la plataforma disminuye el desempeño de los sujetos obligados si se promedia el cumplimiento que tienen en sitio y SIPOT.

A la fecha no hay seguimientos de este estudio en materia política, ni se toma en cuenta la calidad de la información que subieron los sujetos obligados; es decir, no se menciona la información que contiene errores, que está deliberadamente en blanco o que se llenó con números al azar. Este seguimiento es importante porque sin una verdadera evaluación y seguimiento se caería en la tradicional simulación que ha caracterizado los controles y disposiciones legales sobre agentes, recursos y sobre procesos. Entonces, lo que se propone en este estudio es un análisis en dos partes: i) un análisis formal, que considere los materiales que se suben al SIPOT y en los sitios de transparencia de los sujetos obligados y; ii) uno análisis sustantivo, que permita una revisión de la calidad de la información.

En el análisis formal se realizó una búsqueda paralela en los sitios de los nueve partidos políticos y en el SIPOT entre el 11 y el 17 de mayo del 2017. Se consideraron los lineamientos en materia de aplicabilidad expedidos por el INAI. Se enumeró la cantidad de fracciones aplicables y

---

<sup>3</sup> <http://www.animalpolitico.com/2017/05/plataforma-nacional-transparencia-lastre/>

las fracciones que en realidad se subieron, tanto en el Sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia, como en el sitio de internet que deben tener los sujetos obligados. Por último, se obtuvo por separado el porcentaje de cumplimiento de las dos plataformas y se denominó cumplimiento aparente.

En la segunda parte se inspeccionó la información recopilada y se capturaron las imágenes por cada consulta mediante una bitácora detallada, misma que se anexa junto con un desglose partido por partido. Los criterios usados para la revisión sustantiva son los siguientes:

- **Información incoherente (-1):** Existe un formato que se llenó, no son datos al azar, pero su contenido no tiene utilidad para quien lo consulta.
- **Documentos basura (-1):** Existe formato que se llenó, pero su contenido son datos puestos al azar.
- **Formatos en blanco (-1):** El formato se subió sin llenarse.
- **Justificación indebida (-1):** Se escribe una nota explicando que no existe obligación, aun cuando la ley y el garante lo ordenan.
- **Información incompleta (-.5):** Existe un formato llenado parcialmente. Los formatos sin hipervínculos o con hipervínculos sin función, se consideran incompletos.

De la revisión realizada se deriva el porcentaje de cumplimiento real, que es el número de fracciones subidas, menos información que cumple los criterios antes mencionados; el número de fracciones tanto del sitio como del SIPOT se convierten en el porcentaje antes mencionado.

El análisis de la transparencia de los partidos políticos tiene dos hipótesis a comprobar:

- **Hipótesis formal:** El SIPOT sigue siendo un obstáculo a la transparencia, toda vez que la información que se subió a éste es menor que la que se encuentra en los sitios de internet de los organismos garantes.
- **Hipótesis sustantiva:** Ante la premura de la revisión y la falta de compromiso con la transparencia por parte de los partidos políticos, existe una brecha entre el cumplimiento aparente (la cantidad de formatos subidos al SIPOT y al sitio de transparencia) y el cumplimiento real (información útil). A mayor brecha, mayor opacidad del partido político en cuestión.

La información obtenida del análisis formal se presenta en la Tabla No 1.

**Cuadro No 1**

<b>Sujetos Obligados</b>	<b>Fracciones aplicables</b>		<b>Fracciones subidas al SIPOT</b>		<b>Total</b>	<b>Total %</b>
	<b>Art. 70</b>	<b>Art. 76</b>	<b>Art. 70</b>	<b>Art. 76</b>		
PRI	33	30	33	30	63	100%
PAN	33	30	31	26	57	90%
PRD	33	30	14	11	25	40%
MORENA	33	30	3	14	17	27%
MC	33	30	29	27	56	89%
PANAL	33	30	27	26	53	84%
PES	33	30	33	29	62	98%
PVEM	33	30	33	30	63	100%
PT	33	30	22	27	49	78%

Fuente: elaboración propia con datos del SIPOT y página de partidos, 2017.

Es importante destacar un hallazgo en la información referente al Partido del Trabajo, toda vez que se intentó consultar varias veces el sitio de internet, no se pudo obtener información. Por otra parte, los Partidos Revolucionario Institucional y el Verde Ecologista tuvieron un cumplimiento aparente total en SIPOT y sitio. Fuera de los anteriores, en el resto de los partidos se observa que la información en el SIPOT es menor a la del sitio; es decir, se corrobora a grandes rasgos la hipótesis formal.

En el estudio sustantivo, la información obtenida se refleja en la Tabla No 2.

**Cuadro No 2.**

CUMPLIMIENTO SUSTANTIVO														
Sujetos Obligados	Fracciones subidas al SIPOT		Justificación indebida		Formatos en blanco		Información visiblemente incoherente		Información incompleta (Media fracción)		ACCIONES DEPURADORAS		TOTAL	TOTAL PORCENTAJE
	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76		
PRI	33	30	0	0	0	4	1	0	14	2	18	24	42	67%
PAN	32	30	0	0	5	4	3	1	2	0	22	25	47	75%
PRD	14	11	0	0	0	1	2	1	10	6	2	3	5	8%
MORENA	4	14	0	0	0	1	2	12	2	0	0	1	1	2%
MC	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	28	28	56	89%
PANAL	27	26	1	1	0	1	7	1	11	8	8	15	23	37%
PES	33	29	4	1	1	0	3	0	2	3	23	25	48	76%
PVEM	33	30	0	0	0	0	8	5	12	11	13	14	27	43%
PT	14	20	0	0	1	0	0	0	10	8	3	12	15	24%
Sujetos Obligados	Fracciones subidas al sitio del sujeto obligado		Justificación indebida		Formatos en blanco		Información visiblemente incoherente		Información incompleta (Media fracción)		ACCIONES DEPURADORAS		TOTAL	TOTAL PORCENTAJE
	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76	Art. 70	Art. 76		
PRI	21	27	0	0	4	0	0	0	2	2	15	25	40	63%
PAN	23	24	0	0	0	0	0	1	6	3	17	20	37	59%
PRD	15	16	0	0	0	1	0	0	3	8	12	7	19	30%
MORENA	7	11	0	0	0	0	5	1	0	0	2	10	12	19%
MC	33	30	0	0	0	0	0	0	6	5	27	25	52	83%
PANAL	29	27	1	3	0	0	1	0	2	3	25	21	46	73%
PES	22	23	4	0	0	0	1	0	4	1	13	22	35	56%
PVEM	31	28	2	1	0	0	0	1	7	4	22	22	44	70%
PT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

Fuente: elaboración propia con datos del SIPOT y página de partidos, 2017.

La información ya procesada arroja los siguientes resultados:

Sujetos obligados	Porcentaje cumplimiento aparente SIPOT	Porcentaje cumplimiento real SIPOT	Porcentaje de la brecha
PRI	100%	67%	33%
PAN	90%	75%	15%
PRD	40%	8%	32%
MORENA	27%	2%	25%
MC	89%	89%	0%
PANAL	84%	37%	47%
PES	98%	76%	22%
PVEM	100%	43%	57%
PT	78%	24%	54%

Sujetos obligados	Porcentaje cumplimiento aparente sitio	Porcentaje cumplimiento real sitio	Porcentaje de la brecha
PRI	100%	63%	37%
PAN	97%	59%	38%
PRD	49%	30%	19%
MORENA	32%	19%	13%
MC	98%	83%	15%
PANAL	89%	73%	16%
PES	71%	56%	15%
PVEM	97%	70%	27%
PT	0%	0%	0%

Fuente: elaboración propia con datos del SIPOT y página de partidos, 2017.

### Consideraciones finales.

1. **Se corrobora la hipótesis formal**, toda vez que la mayoría de los partidos tienen mayor información en sus sitios de Internet que en la Plataforma Nacional de Transparencia. Asimismo, en la consulta que se hizo del SIPOT, se tuvo una constante saturación de la página, errores en la visualización de muchos de los formatos y en general, lentitud en la consulta. Esto concuerda con lo que se ha dicho en otros medios.<sup>4</sup>
2. **Se corrobora la hipótesis sustantiva**, existe una tendencia de que, a mayor cumplimiento aparente, mayor brecha con el cumplimiento real. Es decir, el actuar de los partidos tiende a la opacidad y en algunos casos a la simulación por cumplir con una regulación que no da un seguimiento real de la información. Esto nos indica que es posible que no se tiene un objetivo claro en las normas de regulación o que son un mecanismo demagógico y político que intenta aparentar que se está atendiendo la transparencia y la rendición de cuentas, sin tener un verdadero sentido de control que regule las malas prácticas de los partidos políticos.
3. La excepción a la tendencia es el partido de Movimiento Ciudadano, que tiene el mayor grado de cumplimiento y la menor brecha. El PANAL, PAN y PES, presentan porcentajes altos en una de las dos plataformas (SIPOT o sitio), pero porcentajes bajos en la otra. Es decir, no existe concordancia en porcentajes altos en el SIPOT y sitio de internet al mismo tiempo, por ejemplo.

<sup>4</sup> <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/04/19/expertos-alertan-por-anomalias-en-transparencia>

## **Bibliografía.**

**Aguilar**, Luis (1992). *La implementación de las políticas, Estudio introductorio*, M.A. Porrúa, México.

**Furubotn**, Eric y **Richter**, Rudolf. (1998). *Institutions and economic theory*. Ann Arbor, The U. of Michigan Press.

**Merino**, Mauricio (2004). *La Transparencia como política pública: El caso del Instituto Federal Electoral*. Diplomado en Transparencia y Combate a la Corrupción, Edición III (México, D.F.: CIDE), 24 de abril del 2004.

**Natal**, Alejandro y Millán, Henio (2006). *La rendición de cuentas a la luz de la Teoría Agente-Principal: un análisis de la democracia en México*. Documentos de discusión sobre el nuevo institucionalismo No 10. El Colegio Mexiquense.

**Natal**, Alejandro (2006). *Rendición de cuentas: apuntes para una revisión conceptual*. Documentos de discusión sobre el nuevo institucionalismo No 9. El Colegio Mexiquense.

**O'Donnell**, Guillermo (1999). *Horizontal accountability in New Democracies*. In Schedler, Andreas Larry Diamond, and Marc F Plattner (Eds.).

**Ramírez Kuri**, Patricia (coord.) (2003). *Espacio público y reconstrucción de ciudadanía*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. México.

**Schedler**, Andreas, Larry Diamond, and Marc F. Plattner (1999). *The self-restraining state. Power and accountability in new democracies*. Boulder and London: Lynne Rienner Publishers.

**Ugalde**, Luis (2002). *Rendición de cuentas y democracia. El caso de México*. Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática # 21, Instituto Federal Electoral, México.